

morena

La esperanza de México

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL S. P.
RECEBIDO
15 ENE. 2015
10:40 hrs
Mauricio Montano
OFICIALIA DE PLATAFORMA
Electoral.

MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
CONSEJERA PRESIDENTA DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
P R E S E N T E.

San Luis Potosí, SLP a 14 de enero de 2015

Con la personalidad que tengo acreditada como representante de "Morena" Partido Político Nacional, ante esta instancia comparezco para exponer.

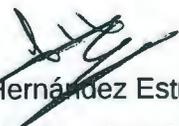
Por medio del presente escrito vengo a acompañar la plataforma y el plan de trabajo que la Ley Electoral en el Estado requiere, según lo dispone los numerales 135 fracción XI y relativos.

Mismos documentos que se acompañan y con los que damos cumplimiento a la normatividad electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Ustedes integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana atentamente solicito:

Único.- Se me tenga por dando cumplimiento con la presentación de la plataforma electoral de morena y el respectivo plan de trabajo.

Anexo queda bajo
resguardo de esta
Oficialia de Partes del
Consejo Estatal Electoral y
Participación Ciudadana.


Juan José Hernández Estrada
Representante Propietario del
Partido Morena SLP



CONSEJO ESTADAL ELECTORAL
DE PARTICIPACION CIUDADANA DE S. P.
RECIBIDO
15 ENE. 2015
10:40 hrs.
OFICIALIA DE PARTES

Plataforma Electoral de MORENA - SAN LUIS POTOSÍ

Luchamos por la vida

En la lucha por la transformación democrática de San Luis Potosí, nos une la esperanza y la acción común.

Este documento expone las propuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (**Morena**) como partido político; su compromiso y modo de hacer política; su visión del Estado y la tarea histórica a la que convoca a los potosinos: lograr el verdadero cambio político y económico.

INTRODUCCIÓN

Combatir la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios del gobierno del Estado, de los diputados del Congreso Estatal y de los altos magistrados del poder judicial de San Luis Potosí. Impulsaremos la austeridad republicana. Promover la transparencia de todas las acciones de los servidores públicos.

Procurar la autonomía y transparencia de la Auditoría Superior del Estado. Impulsar la creación de empleos permanentes en todos los municipios de la entidad. Desarrollar al campo potosino. Apoyar a los campesinos a través de establecer precios de garantía, asesoría técnica e incentivos económicos. Desarrollar la agricultura orgánica y de exportación. Apoyar los proyectos productivos comunitarios.

Apoyar a los empresarios poniendo énfasis en los pequeños y medianos. Otorgar soportes económicos y de asesoría. Impulsar a las empresas cooperativistas. Implementar el seguro del desempleo. Contribuir a eliminar los sindicatos blancos y promover la cultura de la democracia y de los derechos de los trabajadores. Cuidar permanentemente el ambiente en el Estado de San Luis Potosí. Fortalecer la Secretaría de Ecología del Estado. Impulsar una procuraduría autónoma ciudadana para el cuidado del ambiente. Impedir los megaproyectos que contaminan y empobrecen las regiones. Prohibir el



método de fracturación hidráulica en el territorio potosino recurriendo a la soberanía estatal.

Impulsar la educación en el Estado de San Luis Potosí. Combatir el analfabetismo. Garantizar la educación pública y gratuita desde kínder hasta la formación universitaria. Fortalecer a las instituciones públicas de educación superior. Lograr que todos los alumnos que terminan la educación media superior tengan acceso a la educación universitaria. Se establecerán los mecanismos y apoyos necesarios para lograrlo. Apoyar a los maestros de educación pública.

Depuración de todas las fuerzas de seguridad pública en el Estado de San Luis Potosí. No permitir en el Estado de San Luis Potosí la participación del Ejército en labores que competen a las policías estatales y municipales. Limitar la presencia de las policías federales. Impulsar las policías de barrio, de pueblo y comunidad. Aceptados por los vecinos y vigilados por estos. Atender las necesidades de salud del pueblo potosino. Respetar irrestrictamente los Derechos Humanos, especialmente los derechos de los niños, los de los jóvenes y de las mujeres.

Impedir cualquier forma de discriminación sexual, de creencias, etnia, cultura, ideología, y religión. Se fortalecerá la independencia, autonomía y ciudadanía de la CEDH de SLP. Impulsar la democratización de los medios de comunicación. Se eliminarán todo tipo de dádivas a los monopolios de la información en el Estado. Se apoyará a los medios de comunicación alternativos y comunitarios. Se impulsarán la movilidad urbana sustentable. Se implementará el sistema de Transporte público de bajo costo. Se descentralizarán las actividades culturales. Se debe llegar a las colonias y a los pueblos.

Impulsar y proteger las expresiones culturales de los pueblos y etnias. Privilegiar a los creadores potosinos en todas las ramas del arte y la cultura. Se promoverá el deporte en todo el estado. Se impulsará el apoyo a todos los deportes. Defender la Soberanía Estatal, del Municipio Libre y de los Pueblos.



PLATAFORMA POLÍTICA

Estos tiempos de cambios y descontento social, de crisis política, económica y de seguridad, abren la posibilidad de transformar por la vía democrática a San Luis Potosí, pero también existe el riesgo de profundizar en las causas de la crisis y provocar un retroceso aun mayor, que borre logros que el pueblo ha conquistado en su historia de lucha, resistencia y revoluciones.

La crisis es general: economía pasmada, sociedad empobrecida, recursos naturales saqueados, omnipresente inseguridad que obliga a comunidades a procurar su autodefensa ante la cerrazón de las autoridades y legisladores. En contrapartida, en todo el estado, ciudadanos se organizan y movilizan en defensa de su patrimonio, su tierra, su empleo, sus derechos, su dignidad, su voto; y se solidarizan con otros.

Vivimos una emergencia nacional. El caso Ayotzinapa detonó el descontento. La barbarie se hizo intolerable. Amplios sectores, jóvenes en su mayoría, han manifestado su indignación y exigen justicia por ese crimen de Estado que involucra a autoridades municipales, estatales y federales.

Como avalancha social, la indignación movilizada, empuja y ha puesto en cuestión al gobierno y al sistema político mismo; políticos y empresarios corruptos son considerados responsables de la degradación, por subordinarlo a un modelo económico y de negocios depredador, que somete a las instituciones públicas a intereses privados y extranjeros.

Lo que impera en muchas regiones del estado, es una violencia institucionalizada, que criminaliza los movimientos sociales, a los diversos en sus sexualidades, a las mujeres y a las justas demandas. Un ejemplo de ello es la detención de compañeros de Morena que se manifestaban pacíficamente en la anterior inauguración de la Feria Nacional Potosina, uno de ellos, quien se registró como aspirante a la candidatura por el Gobierno del Estado.



En México, no existe un Estado fallido, hay un Estado en crisis; resquebrajado por la corrupción, al servicio de una minoría privilegiada, que renunció a sus responsabilidades sociales; y que ahora es impugnado por los ciudadanos en las calles. El gobierno usa el miedo como arma política. Pero con pancartas éstos responden: "Nos han quitado todo, hasta el miedo".

Las manifestaciones pacíficas y multitudinarias del otoño de 2014, también han mostrado un rechazo social a la violencia, a la destrucción del territorio y la extinción de los derechos ciudadanos. Son un llamado colectivo a cambiar de raíz al gobierno, el sistema político y el modelo económico. Sólo un nuevo pacto social, que incluya a todos los mexicanos, puede transformar democráticamente al Estado y a la economía, para ponerlos al servicio de la nación.

En este momento se confronta un proyecto de vida para todos frente a los proyectos de muerte que benefician a unos cuantos y perjudican a todos. Está en disputa el presente y el futuro de México. Está en disputa la historia, las tierras, el agua, el petróleo de la Nación, los derechos y la vida.

El gobierno actúa contra el interés nacional y colectivo. El Congreso legaliza el despojo de tierras, la privatización de bienes públicos y la venta del país. La Corte rechaza la consulta energética y niega a los mexicanos el derecho a ser consultados. Por eso el destino del país hoy está en manos de los ciudadanos.

Somos testigos del despertar de una nueva generación y de muchos mexicanos. De manera masiva, sin violencia –a pesar de las provocaciones–, las multitudes caminan sin detenerse, confiados en que es posible cambiar el gobierno corrupto y el sistema injusto al que sirve.

Morena apuesta por la vida, por el despertar de la gente, por construir, juntos, un México de bienestar, libre y soberano.



La única salida es construir una democracia verdadera

La rapacidad de la minoría en el poder no tiene límites: Concentra la riqueza y condena a millones de mexicanos a la pobreza; cancela el futuro de jóvenes y niños. Convirtió a México en uno de los países más desiguales del mundo. Con ambición desmedida secuestró las instituciones, atropella garantías constitucionales, manipula elecciones, entrega los bienes nacionales a extranjeros, devasta el medio ambiente y reduce los recursos a la salud, la educación y el desarrollo social.

Frente a la crisis actual, no hay de otra que el cambio de gobierno, de política y de sistema. La única salida es recuperar las capacidades ciudadanas políticas, económicas, sociales y culturales, colectivas e institucionales. El camino es construir una democracia verdadera y crear una economía para bienestar de todos, con libertad, igualdad, soberanía y un medio ambiente sano.

Morena nació para organizar a los mexicanos en la lucha por el cambio democrático en México, por la vía pacífica, legal y electoral. Como partido, nuestro deber es servir a la sociedad mexicana, levantar las banderas de nuestro pueblo y acompañar las luchas sociales. Por eso nos preparamos para defender los derechos y los votos de todos, para promover la capacidad social de instituir y decidir lo que más nos conviene. De proponer alternativas y de actuar ante las urgencias.

Una revolución ciudadana está en marcha y existe una propuesta alternativa para abrirle camino a la vida y a la democracia. Busquemos superar la pobreza y la desigualdad, construyendo un desarrollo sustentable, democrático, que potencie autonomías, identidades y ciudadanías diversas. Ante el desastre actual, entre todos, debemos construir un proyecto económico, político y cultural emancipador, que supere el colonialismo disfrazado de modernización y recupere la soberanía.

A pesar de su fracaso económico y social, el régimen neoliberal amenaza con mantener la misma política, por la vía autoritaria. En dos años, Peña Nieto y



sus aliados en el Congreso –PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL– llevaron a cabo reformas constitucionales y de leyes secundarias, que trastocaron los fundamentos históricos de la Constitución, eliminando derechos y entregando los recursos de la nación y todo el sector energético a manos privadas, nacionales y extranjeras; subordinando con ello la soberanía nacional.

La crisis actual no se dio a pesar de las reformas neoliberales (como se dice en el exterior), sino como consecuencia de las mismas. Ya son 30 años de reformas a favor de una minoría, nacional y extranjera. Por eso, la regeneración nacional pasa por revertir las reformas aprobadas: la educativa, la laboral, la fiscal, la de telecomunicaciones, la energética, la minera y todas aquellas que afectan derechos fundamentales de los mexicanos. Recuperar recursos y áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

La educación es un clave, por eso es tarea fundamental defender la educación pública en todos sus niveles. La llamada reforma educativa en realidad son medidas laborales dirigidas a restringir los derechos de los maestros y crear condiciones para la privatización de la educación.

La reforma fiscal se hizo para aumentar los ingresos del gobierno ya que entregará las ganancias del petróleo a trasnacionales. El gobierno incrementó los impuestos y los precios de los combustibles, la gasolina, el diesel, el gas y la luz, pero las grandes empresas no pagan impuestos.

Uno de los cambios más graves ha sido la reforma energética, que entrega el petróleo y el gas a extranjeros y permite afectar el medio ambiente y la salud. Las actividades de las empresas energéticas y mineras estarán por encima de cualquier otra. Así se legalizó el despojo (como en la época colonial hay derechos de “servidumbre”), el derecho privado estará sobre los derechos de ciudadanos y de pueblos.

Estas reformas están provocando una guerra por el agua y por el territorio. La protección del medio ambiente, del agua y la salud, obligan a rechazar actividades industriales depredadoras de la naturaleza y de la salud. Por eso



Morena propone prohibir las explotaciones mineras de tajo a cielo abierto y el método de fractura hidráulica (*fracking*) para extraer gas o petróleo no convencionales (*shale* o esquisto), que provocan severos daños al medio ambiente, los acuíferos y la salud pública.

Los proyectos de desarrollo, infraestructura y de extracción de minerales e hidrocarburos deben respetar los derechos de la nación, el medio ambiente, la sustentabilidad, los derechos de la gente y la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Como partido-movimiento acompañamos a los pueblos que se oponen a la devastación de sus territorios y promovemos recursos legales que frenen los proyectos destructivos (minería a cielo abierto, *fracking*, desarrollos industriales, energéticos, de infraestructura, turísticos y comerciales, trasvase de ríos y presas).

Nuestra propuesta económica y social promueve la soberanía alimentaria y energética; potencia la economía social y solidaria; eleva la honradez como valor fundamental del servidor público, así como la transparencia y la fiscalización sobre el quehacer público. Hay que recuperar los salarios y los precios de los productores. Se requiere una reforma fiscal progresiva (que pague más el que gana más); una banca social de apoyo a la economía popular y al mercado interno y garantice el intercambio justo con el exterior.

Es tiempo de reconstruir a México. La actual política ha causado grave daño a los mexicanos y pone en riesgo nuestra viabilidad como nación. La única manera de terminar con estas injusticias es una transformar de fondo al país. Por eso convocamos al pueblo mexicano a defender sus derechos, a llevar a cabo una revolución de las conciencias, de alcances históricos, para reconstruir la nación desde sus cimientos, para hacer realidad la libertad, la fraternidad, la justicia y la democracia.

Queremos un país que dé seguridad y bienestar a sus habitantes, que respete las libertades y la diversidad; una nación de personas dignas, solidarias y dichosas: mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, profesionistas, empresarios, estudiantes, niños, ancianos.



El renacimiento de México necesita de la participación de todos los ciudadanos libres que trabajen en la construcción del bien común. Este país ya está cambiando. La energía social está en marcha. Somos millones quienes estamos comprometidos con la transformación. Queremos que los ciudadanos unan voluntades y esfuerzos para crear la organización ciudadana que defienda los derechos de todos y forme las nuevas instituciones públicas que hagan de México una nación democrática, incluyente y soberana.

Morena es un instrumento de los ciudadanos. El partido no sólo escucha la palabra del pueblo, busca que éste tome el destino del país en sus manos. Nuestra propuesta es que sea la sociedad la que asuma sus responsabilidades y derechos, que los ciudadanos intervengan en la solución de la actual crisis y ejerzan la democracia libremente, sin intermediaciones corporativas, clientelares o corruptas.

Es la hora de actuar, de organizarse desde abajo, de luchar pacíficamente. Otro México es posible. Su definición será obra de la participación, amplia y plural del pueblo mexicano, con política fundada en el amor a la igualdad y en el aprecio a la diversidad.

Vida buena, democracia plena, autodeterminación y protección a la naturaleza

Los mexicanos hemos luchado por ser libres. Este imperativo de libertad y autodeterminación no está sujeto a ningún tipo de limitación, condicionamiento o restricción alguna. Por voluntad propia, somos y seguiremos siendo libres en el siglo XXI.

Para lograrlo, proponemos un cambio verdadero que engloba cuatro objetivos:

a) Bienestar de todos (vida buena) y florecimiento humano (vida plena) que consiste en el desarrollo de todas las potencialidades de todas las personas, sustentadas en los derechos humanos.

b) Democracia plena, más allá del respeto al voto libre y reflexivo de todos; y la igualdad de oportunidades para acceder a las candidaturas. Supone formas



avanzadas de democracia participativa en la política y también en la vida social y en las actividades económicas, base de la igualdad, la justicia y la libertad.

c) Autodeterminación nacional que puede entenderse como **soberanía nacional** utilizada realmente para decidir nuestros objetivos como pueblo y como nación.

d) Relación armónica con la naturaleza que supone derivar de ella lo que requerimos para los demás objetivos; sin destruirla ni agotar sus recursos. México como el décimo primer país más poblado del planeta está obligado a contribuir para impedir la catástrofe del cambio climático. Cualquier alternativa del siglo XXI tiene que contemplar una propuesta ecologista y de protección ambiental.

En este sentido, **Morena** no ve el crecimiento económico sustentable como un fin, si no *como un medio* que permite disponer de los recursos indispensables para lograr el renacimiento de México y de su pueblo.

Las propuestas se inscriben en el marco de un Proyecto Alternativo de nación, que es opuesto al proyecto neoliberal dominante en México. Por lo tanto, van encaminadas a promover un Estado Social y una democracia real, en los que se fortalezcan y amplíen los derechos sociales básicos y los intereses de la nación.

Por el renacimiento de México

1. La revolución de las conciencias está en marcha

El diagnóstico de los problemas nacionales es conocido, pero se insiste en mantener la misma política seguida hasta hoy. La barbarie social y ambiental del modelo imperante está a la vista de todos: un puñado de familias y empresas, concentran poder y riquezas, usando el presupuesto y las instituciones públicas. La degradación de la vida social se extiende, se desmoronan las instituciones públicas, se devasta la naturaleza, aumenta la desigualdad y la pobreza, se institucionalizan la corrupción y la violencia. La economía criminal infiltra gobiernos, empresas y bancos.



Frente a esta realidad, urge un cambio profundo que revierta el daño causado por el modelo neoliberal. Eso depende de que los mexicanos recuperemos nuestras capacidades políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales para materializar un proyecto alternativo.

El camino a seguir es establecer una democracia plena: con participación ciudadana activa y democratizando el poder. Sólo así alcanzaremos un crecimiento económico sustentable, desarrollo y bienestar. Para eso requiere la organización y movilización de los ciudadanos, una revolución de las conciencias sustentada en la cultura y la historia del pueblo mexicano, en su vocación de trabajo y generosidad.

Se trata de construir una mayoría social, un bloque histórico, permitirá promover cambios, leyes, políticas y alternativas al proyecto depredador que impone el actual gobierno.

Revolución moral y cultural

Los principios neoliberales reducen la vida social al interés y a la ganancia, como fines últimos. Justifican el individualismo, la desigualdad social, el abuso de poder y la antidemocracia. En sus valores, predominan el materialismo, el engaño, la corrupción y el afán de lucro. Sostienen un sistema injusto en el que una minoría impone sus concepciones y sus intereses, por encima de la dignidad, el derecho, la moral y el bien común.

Cuando los ciudadanos se unen y actúan en común, todo es posible. La acción colectiva implica una revolución ética, materializada en valores sociales y prácticas culturales de solidaridad, apoyo mutuo, de respeto a la diversidad, de sentido de comunidad, de amor al prójimo y de relación armónica con la naturaleza.

El colonialismo cultural niega la diversidad, impone una visión única y excluyente, de la misma forma que los modelos agroindustriales acaban con la diversidad en la naturaleza. Un México pluricultural y biodiverso debe crear condiciones democráticas, de igualdad y equidad para los pueblos originarios, culturales, económicas, políticas y sociales. Debemos aprender de la democracia comunitaria y preservar las formas de producir que conservan la riqueza biológica.



Revolución ciudadana

La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde al interés general y la comunidad democrática surge de la intervención de la ciudadanía en la vida pública.

La revolución pacífica que propone **Morena**, implica tomar conciencia de nuestras responsabilidades como ciudadanos; conlleva aceptar la pluralidad, que todos tenemos los mismos derechos pero existe una desigualdad de oportunidades. El poder de los ciudadanos deriva de su participación en las tareas públicas, en proponer, vigilar y tomar parte en las decisiones de gobierno.

En ese empeño, se necesita una cultura democrática, construida en el ejercicio de los derechos, en la convicción cotidiana de que el Estado somos todos y que el rumbo del país es una responsabilidad colectiva. Es un trabajo entre iguales, donde el diálogo y la acción hacia un fin común, desata la solidaridad de todos, el respeto y la ayuda mutua. Es la práctica que le da sustento a la existencia de un Estado social, justo y democrático.

Cambiar la vida

La alternativa a la profunda crisis civilizatoria es cambiar nuestra forma de vida, por una vida buena. Ese buen vivir donde cada mujer y cada hombre valga por lo que es—sin importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales— y no por lo que tiene. Que cada quien valga por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su lealtad a las normas de convivencia y sus aportes al bienestar de la sociedad. Una vida donde prevalezcan la dignidad, el honor, la ética y la búsqueda de la felicidad. Un país donde la virtud sea el hábito de hacer el bien, en el que la mayor satisfacción de cada uno sea el bienestar de todos, y donde se recupere el espíritu de servicio a la comunidad y el gobierno trabaje para los ciudadanos y no al revés.

Nos mueve la convicción de que la felicidad no la proveen los bienes materiales acumulados sino el procurar el bienestar a los demás.



Ética política

Ser una persona de izquierda es preocuparse por los demás, es mirar los problemas desde interés popular y trabajar para el bien común. La ética política democrática implica trabajar para servir a la comunidad y en su beneficio.

Como partido, **Morena** está convencido que la política es asunto de todos, no sólo de políticos profesionales. Es un derecho participar en los asuntos públicos, políticos, sociales culturales, ambientales. En la vida política nacional es moneda de uso la corrupción, la compra de votos, el lavado de dinero, el clientelismo y el corporativismo. Por eso queremos una ética política sustentada en el bien común y el respeto a los demás, como esencia del cambio democrático.

Morena busca dignificar la política, ciudadanos trabajando para los ciudadanos.

La transformación de las instituciones requiere ampliar la democracia representativa: con elecciones limpias, rendición de cuentas de partidos, gobernantes y representantes populares; con mecanismos de democracia comunitaria y participativa, candidatos ciudadanos y participación social en decisiones y ejecución de planes y programas de gobierno; y con figuras de participación directa y fiscalización social a nivel local.

Una modernidad alternativa

Nuestro proyecto está inscrito en el contexto planetario. Hoy se vive una crisis de la civilización industrial, del capitalismo salvaje, materialista y tecnocrático. El destino de la nación no está aislado de lo que ocurre en el mundo.

El reto político y económico del país es también un reto civilizatorio: o continuar una modernización que explota, margina y enajena a la ciudadanía, que degrada cada vez más al mundo, que amenaza a la naturaleza, que concentra los capitales y pone a la política al servicio de las élites; o, se construye una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico, el uso democrático y racional del agua, la energía, la biodiversidad, la tecnología y los conocimientos científicos; que avance en el control social del mercado y de los poderes políticos, la democracia y la recuperación de la cultura en tanto riqueza diversa y factor dinámico de nuestra historia.



México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria.

Reconocemos como referentes las visiones basadas en el "buen vivir" y las innovaciones culturales, morales, políticas e ideológicas nutridas en la vida de los pueblos originarios y afroamericanos. En consonancia, la transformación que proponemos representa un cambio democrático del poder político y la construcción de un poder social y cultural.

2. Por una ética republicana y contra la corrupción.

En la vida pública y social de nuestro país existe una corrupción arraigada, las instituciones se encuentran capturadas por poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías. El dispendio del gobierno es una ofensa para todos.

En **Morena** luchamos contra cualquier forma de corrupción, rechazamos el uso del poder público para enriquecer personas o grupos, no aceptamos el tráfico de influencias ni el desvío de recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Buscamos instaurar un verdadero sentido del servicio público, eliminando el dispendio de recursos, los salarios excesivos y el derroche de la alta burocracia.

Queremos que el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica, grandes empresas transparenten el origen y manejo de sus recursos y presenten cuentas públicas.



Nos comprometemos a que los miembros de nuestro partido que sean electos para cualquier cargo ya sea en los órganos legislativos o en la administración pública, se comprometen:

1. Honestidad.

A proponer iniciativas legislativas y acciones de gobierno para denunciar y combatir:

- La corrupción, la práctica abusiva del poder en las funciones públicas para obtener un provecho ilícito, económico o de cualquier índole.
- La impunidad, la ausencia de sanción para las conductas prohibidas por nuestros estatutos, este código o la ley.
- La simulación, la mentira, el disimulo o el ocultamiento malicioso de los hechos para impedir que se conozca la verdad de nuestras actividades y posicionamientos políticos.

2. Austeridad Republicana

- A promover en sus esferas de competencia la reducción de los sueldos excesivos que se paguen en la administración pública en sus tres niveles, así como eliminar el despilfarro de recursos.

3. No a la discriminación

- A proponer iniciativas legislativas y acciones de gobierno para denunciar y combatir las prácticas de compadrazgo, favoritismo y nepotismo. Se impedirá cualquier forma de discriminación sexual, de creencias, etnia, cultura, ideología política, religión o por cualquier otro motivo.

4. Legalidad

- A respetar y hacer respetar el Estado de Derecho, dentro de nuestro propio partido como en los distintos niveles del poder público.

6. Patriotismo

- A anteponer en todos nuestros actos públicos y privados, el interés de México a los intereses del partido, de las personas y grupos que se incorporen a nuestra causa.



7. Lealtad

- A no adquirir nuevas responsabilidades profesionales distintas a las que tienen que cumplir en los puestos que ocupen el poder legislativo o en la administración pública.
- A destacarse por su probidad, por la lealtad y fidelidad a la patria, al partido, a nuestros compañeros, familiares, amigos, para nosotros la integridad no es divisible; abarca la vida pública y privada.

8. Transparencia

- A sujetar sus actividades y bienes al principio de total transparencia. Y a informar cada año respecto de los bienes que adquieran.
- A proponer iniciativas legislativas y acciones de gobierno para denunciar y combatir el tráfico de influencias y promover los procedimientos administrativos y las sanciones, a quienes intenten obtener un lucro o un trato a favor de sí mismos y de terceros con la influencia o las facultades de los cargos públicos.

9. Responsabilidad

- Se comprometen a registrar, a hacer público y cumplir todas las promesas contraídas y todos los programas propuestos durante las campañas electorales.

3. Gobierno democrático al servicio del pueblo y de la nación.

El Estado mexicano está bajo el control de una minoría que utiliza el poder público en su beneficio. La oligarquía tiene secuestradas a las instituciones. Se ha desfigurado a la Constitución eliminando principios fundacionales. Las elecciones no son libres ni auténticas. Se desgobierna contra el interés nacional.

Nuestra propuesta es recuperar democráticamente al Estado, a través de la participación activa y el voto ciudadano; lograr una mayoría que permita reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido enajenados de manera anticonstitucional. En especial, que pueda revisar concesiones y contratos en la minería, la industria eléctrica, el espacio radioeléctrico, el petróleo y el gas.



Es indeclinable e inalienable el dominio directo de la nación sobre el territorio, el subsuelo, los litorales, el espacio aéreo y los recursos y áreas estratégicas, base de la soberanía nacional y que deben ser administradas en beneficio de los mexicanos.

Luchamos por recuperar el principio de la soberanía popular plasmada en nuestra Constitución y poner el Estado al servicio de los ciudadanos y de la nación a través de elecciones libres y auténticas, del sufragio efectivo, con instituciones electorales que sirvan al interés público y garanticen equidad.

Pero más allá de la democracia formal y electoral, para **Morena** la soberanía popular implica una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones, a través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular y otras formas de participación republicana.

La consulta ciudadana, pese a que la Corte negó el derecho a ejercerla en materia energética, debe convertirse en un instrumento de intervención democrática permanente de los ciudadanos en asuntos de interés colectivo y de construcción de ciudadanía.

La soberanía reside en el pueblo

- Hay que restablecer el principio de la soberanía popular para que el Estado sirva a los ciudadanos y a la nación; para que el Congreso Local apruebe leyes que garanticen los derechos del pueblo.

Un Estado social y democrático

- El Estado debe recuperar su responsabilidad con la sociedad, combatir la desigualdad, tener un papel activo en la economía para impulsar el desarrollo y el bienestar social (salud, educación, vivienda), restablecer el Estado de derecho y la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.

- La defensa de la democracia y del voto popular, garantizar elecciones limpias, equitativas y sin dispendio de recursos, son la base institucional para establecer un gobierno democrático. Se debe hacer respetar el derecho a disentir, el diálogo como forma de gobernar, el respeto a todas las expresiones ideológicas y políticas, asegurar el ejercicio de la crítica y la expresión libre. No limitar los derechos de manifestación pacífica ni criminalizar los movimientos sociales y populares.



Por un sistema electoral democrático

Si la recuperación democrática del Estado implica la participación electoral de los ciudadanos, para construir una mayoría a favor del cambio, y si el actual sistema electoral carece de legitimidad y permite prácticas fraudulentas, se deben tomar medidas urgentes: garantizar la equidad electoral y se frene la desmedida y distorsionadora influencia de los medios de comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad el financiamiento público a partidos y el costo de las campañas; aprobar el derecho de réplica y reglamentar la publicidad gubernamental; eliminar el financiamiento privado; crear instituciones electorales nacionales que sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las candidaturas a cargos de elección popular y en las instituciones públicas; garantizar el voto de los mexicanos en el exterior; sancionar cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las elecciones; establecer controles para impedir la intervención de los cárteles de la droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos, coaliciones, candidatos, dirigentes partidistas y de quienes intervengan en los procesos electorales.

Equilibrio de Poderes

Actualmente, el poder Ejecutivo mantiene el control del poder Legislativo y del Judicial.

- Impulsaremos una verdadera división de poderes que dé lugar a un equilibrio y mutua vigilancia, que limite los excesos del poder, que cumpla con los objetivos fijados por las leyes, que rindan cuentas y respeten la voluntad popular.

- El Congreso no puede reformar los principios fundantes de la Constitución. Pero la mayoría legislativa reformó artículos fundamentales como el tercero, el 25, 27, 28 y 123, modificando el espíritu mismo de la carta magna y, por tanto, anulando el pacto social que lo hizo posible. La Corte negó la Consulta popular como camino para restaurar el orden constitucional en materia energética. Hay opciones legales en el extranjero como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer ese derecho.



- En todo el país haremos efectiva la obligación de la administración pública federal, estatal y municipal, de obedecer los principios de la estricta legalidad, transparencia en sus actos y rendición de cuentas.

El nuevo federalismo

El centralismo asfixió la vida política de los estados, los gobernadores estaban sujetos al Ejecutivo federal; a partir del año 2000, con la derrota del PRI, la pérdida de control de la federación dio lugar a la instauración de cacicazgos regionales, donde los gobernadores se comportan como señores feudales.

Ahora vuelve la tentación autoritaria y centralista, Peña Nieto interviene en los estados, nulifica los poderes soberanos de entidades como Michoacán, castiga a opositores y ahora amenaza con disolver ayuntamientos si sospecha que tienen ligas con el narcotráfico. Se quiere establecer un centralismo, mando único incluido, propio de una dictadura encubierta.

- Proponemos un nuevo federalismo, que permita políticas y estrategias nacionales de beneficio regional y estatal, bajo una relación de respeto a sus atribuciones y representaciones, entre municipios, estados y federación.

- No hay desarrollo nacional sin desarrollo en las regiones. Debe prevalecer el federalismo en el reparto del presupuesto nacional, dejando de lado el centralismo o el partidismo.

- La capital de la República debe recuperar su condición de entidad fundadora de la Federación y tener plena igualdad de derechos respecto a las demás. Es inaceptable que se sigan regateando los derechos plenos a los capitalinos.

- La refundación democrática del Estado debe comenzar desde el municipio. Deben fortalecerse sus atribuciones, su presupuesto y su carácter de gobierno local. Rechazamos la pretensión de disolver los ayuntamientos con el pretexto de combatir al narco, se retrocedería a tiempos autoritarios.

En nuestro país, la justicia tiene precio. La impunidad constituye el pilar fundamental del sistema político; los tribunales legalizan los atropellos y despojos de los poderosos y castigan a indefensos y a quienes se oponen a las arbitrariedades. La Corte negó el derecho de consulta, en cambio liberó a todos los asesinos confesos de Acteal.



El Poder Judicial de la Federación debería ser un auténtico garante y defensor de la Constitución y sus leyes. Y los jueces, intérpretes de la Constitución con independencia.

- Se propondrán mejores mecanismos de control y vigilancia de ministerios públicos y jueces. Leyes con sanciones severas para funcionarios que incurran en actos de corrupción, fraude y cohecho.
- Se propone elegir democráticamente a los ministros de Corte para que representen los intereses de los ciudadanos y no del poder que los nombra. No hay democracia sin justicia para todos.

Un Estado democrático de Derecho

- En México no hay Estado de Derecho. Es fundamental la lucha por garantizar el respeto a los derechos humanos. Desde el acceso a la justicia hasta el disfrute del derecho a la alimentación, al agua y a la vida.
- Las leyes deben facilitar el ejercicio de las formas de democracia participativa. Modificar las leyes reglamentarias para facilitar el ejercicio de derechos como la consulta popular, el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, la auditoría ciudadana, la audiencia pública y el cabildo abierto.
- La tarea de recuperar democráticamente el Estado solo será posible si se reconstruye la República desde abajo, creando modalidades de poder ciudadano, nuevas instituciones públicas, nuevos instrumentos legales y políticos, para gobernar con el pueblo y para el pueblo.

4. Por la Soberanía Nacional y la Independencia.

En los últimos 30 años se ha consumado un proceso de pérdida de poder del Estado, que ha significado la pérdida de soberanía nacional, política, económica, energética, alimentaria y hasta de seguridad.

La reprivatización del sistema bancario y financiero, hoy abrumadoramente transnacional, es ineficiente y medra con la deuda nacional; se conformó una minería rapaz y contaminante donde predominan las inversiones extranjeras; se fortaleció una industria energética paralela a la pública, ahora legalizada y que se quedará con buena parte de la renta petrolera y con el sistema eléctrico nacional; se consolidó un sistema de comunicaciones privado casi monopolístico;



el duopolio televisivo no sólo tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo sino que lucra políticamente con su posición dominante; se formó un sistema de cadenas transnacionales de tiendas de autoservicio que barren con el pequeño comercio, estrangulan a los proveedores y tienen en sus manos el abasto familiar; aumentan los precios de las gasolinas, el gas y la luz para que sean un negocio rentable para los inversionistas extranjeros.

En la situación actual, si la resistencia ciudadana no lo detiene, en la decisión del gobierno y de las élites está planteada la pérdida de soberanía, la renuncia a la soberanía, la cesión de soberanía y el vaciamiento de la soberanía nacional y popular.

Se pierde soberanía cuando el Estado abandona la conducción de la economía. Se cede soberanía a otros en el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía; o cuando se pierde el control territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. En todos los casos, los mexicanos y la nación van cediendo poder de decisión sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Es muy grave la renuncia a la soberanía alimentaria. No hay nada más importante para un país que garantizar la comida de su pueblo. Además se pierde soberanía sobre los recursos naturales que son premisa de la reproducción de la economía y de la propia vida. Se pierde soberanía sobre el territorio cuando se establece en la ley que las actividades mineras, petroleras y energéticas están por encima de cualquier otra; se abre la puerta al despojo y a la violencia.

Es claro que la pérdida de soberanía popular y nacional tiene su contraparte en el empoderamiento de actores transnacionales cuyo único interés es el lucro: Cargill, Monsanto, Syngenta y otras transnacionales en el caso de los alimentos; Halliburton, Iberdrola, Femosa, Asarco, First Majestic... en el caso de los recursos del subsuelo.

Recuperar la soberanía y oponerse al entreguismo

Debilitada la soberanía nacional hay que apelar a la soberanía popular. Cedida o perdida la soberanía sobre ámbitos y bienes nacionales decisivos, al pueblo le queda el máximo atributo soberano, el de decidir quienes y como deben gobernar, y con ello tratar de enderezar el rumbo del país.



El problema es que en México han cerrado esta vía. En nuestro país no hay democracia, ni siquiera electoral. El pueblo mexicano ha perdido –quizá nunca tuvo– el derecho soberano de elegir a quienes han de gobernarlo y de cambiar el régimen político, derecho que reconoce la Constitución. El régimen ha cerrado la puerta a quienes buscan una mudanza real, quedó claro con los fraudes electorales de 1988 y de 2006. Pero el caso más patético fue la elección de 2012, cuando vivimos la desvergonzada compra de la elección, y un tercer fraude electoral en cinco lustros.

Para el fortalecimiento de la soberanía, **Morena** propone:

- Promover la lucha por la soberanía e independencia nacional.
- Fortalecer el Estado laico, mantener la educación pública, laica y gratuita y garantizar el respeto a la diversidad y a las libertades individuales.
- Recuperar el sentido del artículo 27 constitucional, modificada su esencia, de garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales y sectores estratégicos en beneficio de la sociedad.
- Revertir la privatización del sector energético. Fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que han sido reducidas a simples administradoras de contratos que favorecen a extranjeros.
- Es indeclinable el derecho de la nación sobre el territorio y los recursos estratégicos, que deben ser administrados en beneficio de los mexicanos. **Morena** luchará en todos los ámbitos porque así sea.
- Para revertir la privatización de Pemex, de la industria eléctrica y del patrimonio cultural, queremos conformar una mayoría que permita derogar la contrarreforma energética y la privatización de bienes públicos.
- Promoveremos la salvaguarda de zonas protegidas, playas, bosques y aguas de la contaminación y la industrialización. La protección de la biodiversidad es también proteger un futuro soberano.

5. Por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas.

México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria.



Existen 62 pueblos indios y más de 16 millones de mexicanos son indígenas, representan 40 por ciento de los indígenas del continente.

Actualmente, los indígenas habitan 28 millones de hectáreas; el 22.9 por ciento de los ejidos y comunidades son indígenas; el 28 por ciento de los bosques y la mitad de las selvas están manos indígenas. También está 70 por ciento de los bosques de selva alta perennifolia y de la casi totalidad de los bosques de niebla.

Sus tierras son ricas en biodiversidad y recursos minerales y petroleros. En ellas habitan 15 mil especies de plantas y 620 de animales; contienen el 70% del petróleo del país; una quinta parte del agua y buena parte de hidroeléctricas y concesiones mineras.

Actualmente, más de la mitad del territorio es propiedad social, ejidos y comunidades indígenas y campesinos. En esas tierras existe un valioso patrimonio natural y cultural.

Recuperar las raíces culturales y modos de vida

La recuperación de nuestras raíces de identidad pasa por darle viabilidad económica a la comunidad agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóctonas y mestizas. En el campo están nuestras raíces culturales. El México urbano perderá irremisiblemente su identidad si no se reconcilia con el México profundo, en gran medida el México rural. Pero no se trata de preservar reliquias arqueológicas sino de restaurar la vitalidad socioeconómica del campo como sustento de su vitalidad cultural. No caben aquí nostalgias reaccionarias, que los jóvenes rurales son los primeros en rechazar, queremos un México moderno, plural y abierto al mundo; pero que sea también un México indígena y campesino.

Si al país le falta tradición democrática, el campo ha sido territorio privilegiado del autoritarismo nacional. El México rural ha sido un ámbito donde por norma general no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos. El clientelismo corporativo es tradición acendrada de nuestras organizaciones sociales y el caciquismo autoritario sigue predominando en los gobiernos locales. Si bien los ejércitos campesinos forjaron nuestra historia como país, en



tiempos de paz se restablecen en el agro los autoritarismos. La democracia es una gran asignatura pendiente del México rural.

Desde hace rato los hombres del campo estamos empeñados en transformar profundamente nuestros sistemas de convivencia gremial y ciudadana. Y en particular los pueblos indios han puesto la muestra de lo que puede ser una nueva socialidad democrática, participante y autogestiva.

En la construcción de una democracia participativa es necesario reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indios. Pero el Estado mexicano se ha negado a reconocerlos. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer el derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional, potestad reconocida por las leyes internacionales. Esa autonomía india es también modelo de autonomías cívicas, sociales y económicas que todos, indios y mestizos, están empeñados en construir.

Durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos, socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su cultura.

El colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión nacional única y excluyente, de la misma forma que los modelos agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la naturaleza y con el modo de vida campesino. Un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas condiciones democráticas, de igualdad y equidad para los pueblos originarios, no sólo culturales sino también económicas, políticas y sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza biológica.

Morena lucha porque a los pueblos indígenas se reconozca el derecho a ser consultados, a no ser discriminados; el derecho a su integridad cultural; los derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y los recursos; el



derecho al desarrollo y bienestar social, y los derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado. Nuestro partido está comprometido en que sean cumplidos los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad

En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Pero el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo pacto entre el México urbano y el México rural, y en este marco, una relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario.

Frente a la amenazas sobre su territorio, los indígenas hoy luchan contra el despojo, explotación y muerte de las explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas.

El buen vivir como alternativa

Entre los pueblos indios de América Latina, existe al idea del “Bien común”, en donde el respeto a la naturaleza es parte fundamental. Se incluye la tierra, la Madre Tierra, porque de ella nace, vive y por ella sobrevive la vida.

Las visiones basadas en el “buen vivir” se alimentan de las innovaciones culturales, morales, políticas e ideológicas que generan la vida de los pueblos originarios.

El buen vivir emerge de los pueblos andinos y amazónicos. En San Luis Potosí existe una larga historia de pueblos herederos de Mesoamérica, como Pame, Tének y Náhuatl.

6. Por la democratización y el acceso a los medios de comunicación.

En nuestro país un pequeño grupo aun posee el control de la televisión y de la radio, y medra con la ignorancia, el sensacionalismo y la desinformación en función de sus intereses, económicos y políticos. La reforma a la ley de telecomunicaciones que prometió romper el predominio de unas cuantas empresas, terminó beneficiando a Televisa y a TV Azteca y restringiendo los derechos de la población y de las audiencias.



Las señales radioeléctricas, de televisión, telefonía e Internet son bienes públicos que han sido concesionados para cumplir una función de beneficio social. El Estado debe hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información y el acceso a los medios de comunicación. Por otro lado, la sociedad debe contar con medios propios para expresar su pluralidad y su diversidad.

La reforma de Telecom benefició a los monopolios

Las recientes reformas en telecomunicaciones no cumplieron con las expectativas surgidas en el debate y, al final, se impusieron los intereses de los grupos dominantes y los cambios legales beneficiaron a Televisa y a TV Azteca.

La reforma restringió derechos.

La reforma constitucional del 2013 estableció claramente derechos nuevos como los derechos de las audiencias –el mayor derecho es tener acceso a *diversidad, pluralidad y calidad* de contenidos audiovisuales–, los derechos de los usuarios –evitar el uso y abuso del monopolio telefónico–, los derechos de acceso a universal a Internet, y los derechos a medios comunitarios e indígenas.

Estos derechos se conculcaron para privilegiar los intereses de los monopolios, sobre todo, el interés de Televisa y su socio TV Azteca en su proyecto de expansión hacia la telefonía, de mantener el control de más de 90 por ciento del mercado de contenidos y de publicidad en televisión abierta y en televisión restringida.

No se tomó ninguna medida eficaz para frenar la expansión del negocio de Grupo Televisa en televisión restringida. No se aprobaron mecanismos eficaces para hacer respetar los derechos de las audiencias. Y, por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación mantendrá un control sobre los contenidos tanto de la televisión, como de la radio y hasta de la televisión restringida.

No hay autonomía del regulador. La reforma constitucional se construyó con la idea que la regulación de este poderoso sector se hiciera desde un



organismo autónomo a las ambiciones de control político del gobierno y a las tentaciones de "captura" y manipulación de los grandes monopolios.

En los hechos, el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el proceso de legislación secundaria fue vergonzoso. Los comisionados y su comisionado presidente prefirieron alinearse a la "línea dura" gubernamental, representada por el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos y el gran cabildero de Televisa, Javier Tejado Dondé.

Además se permitirá continuar con el uso político de las concesiones por parte de la Secretaría de Gobernación.

El IFT nace debilitado, hará los "lineamientos" para los defensores de audiencia, pero estará subordinado a la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de derechos de los usuarios; y sus atribuciones quedarán sujetas a la voluntad del Ejecutivo federal.

No es una legislación que garantice condiciones de equidad y de competencia en el proceso de convergencia entre los medios audiovisuales (televisión abierta, televisión restringida) y los de telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil) y la posibilidad de que los medios públicos puedan acceder a esta convergencia.

Respalda a los monopolios. La ley secundaria mantuvo los privilegios políticos, económicos y *de facto* del Grupo Televisa. La promesa de que México entraría a la sociedad de la información y pondría límites a los monopolios quedó como pura demagogia.

Se discrimina y censura. La reforma cerró la posibilidad de que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables. No habrá una reserva del espectro digna. No tendrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo. En otras palabras, cualquiera radio religiosa o parroquial tendrá más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les restringirán los recursos. No habrá verdaderos medios públicos, sino que serán extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores.

Se impondrán el modelo de monopolio de la opinión pública (sólo Televisa y TV Azteca podrán ofrecer sus contenidos en todas las plataformas posibles) y, por



otro, prevalecerá la censura del gobierno federal. El manejo de los monopolios y la postura oficial aparecerán con más frecuencia en un modelos de comunicación facciosa.

Sobre el acceso y las libertades en Internet, son muy vagos los avances. Ciertamente se cambiaron los temas más represivos del capítulo de "Colaboración con la Justicia", pero se mantuvo la posibilidad de que las autoridades ministeriales violen la privacidad de las comunicaciones en Internet. No se aceptó el libre acceso a la red como un derecho ciudadano.

Se impuso el plan de negocios de Televisa. La ley secundaria no frenará la creciente concentración en televisión de paga. Al contrario, alentará el "plan de negocios" de Grupo Televisa. De ser posible, se postergará lo más que se pueda la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital. De todas formas, ambas cadenas apenas alcanzarán a cubrir 16 por ciento del mercado en 5 años. Mientras tanto, Televisa podrá mantener su 70 por ciento de dominio en televisión abierta y aumentar su dominio en la publicidad, los contenidos y adquirir más empresas de televisión de paga.

El control y la manipulación que ejercen la elites políticas y económicas a través de los medios de comunicación electrónicos es uno de los principales obstáculos para instaurar la democracia en México. La transformación del país reclama un cambio de las relaciones entre la sociedad y los medios, por eso, a pesar de la reforma a las telecomunicaciones, **Morena** propone:

Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías

Promover en las leyes la libre competencia y la desconcentración de las concesiones que otorga el Estado. Eso evitará los monopolios de radio y televisión. Estas medidas abaratan, democratizan y universalizan el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.



Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar este servicio público indispensable y acabar con los monopolios

La ley debe impedir su concentración en unas cuantas manos y regular la relación de los medios con la sociedad y el Estado. La preponderancia del mercado, establecida por el IFT, ha permitido beneficios para el duopolio televisivo que se amplió a otros servicios como el cuádruple play.

Garantizar el derecho a la información de los mexicanos.

Son muy débiles los instrumentos legales para defender los derechos ciudadanos y de las audiencias. Garantizar el derecho de réplica y de información sobre asuntos de interés público es una prioridad. Falta una verdadera defensoría del público y de los derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Debe formarse un fondo de fomento para la producción de programas educativos, culturales y de entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes. En lugar de quedar relegada como hasta ahora, la formación educativa debe estar vinculada a los contenidos de la televisión. Por otro lado, debe garantizar un mínimo de programación de cine nacional en la televisión abierta y por cable.

La verdadera convergencia digital fue reducida por el gobierno al reparto electoral de televisiones digitales.

Establecer medios públicos que cumplan con el derecho a la información

En la política del gobierno se ha privilegiado la televisión comercial y los negocios digitales y de la red. Se ha dejado de lado el impulso a medios públicos que reflejen la pluralidad política, étnica, social y cultural de los mexicanos. Medios públicos que deben ser entes de interés colectivo, con presupuesto público, patrimonio propio y regulados por un consejo ciudadano.

Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios

Si un sector ha castigado las últimas reformas de telecomunicaciones han sido las radiodifusoras y televisoras locales y regionales comunitarias o ciudadanas,



que permiten el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. **Morena** lucha por garantizar el libre funcionamiento de medios comunitarios, como radios y televisiones locales y regionales.

Garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a la información y de acceso a las nuevas tecnologías y medios de comunicación.

Morena insiste en democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías; la libre competencia y el fin de la discrecionalidad del gobierno en el otorgamiento de concesiones.

7. Por un nuevo modelo económico.

La actual crisis financiera y económica mundial revela que el mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la vez justo.

Por esta razón el Estado ha adquirido un perfil más activo en la economía. Los gobiernos están retomando el espacio que cedieron al mercado y al capital financiero para fortalecer sus economías, a la vez que introducen regulaciones en diferentes actividades económicas y financieras.

En México, el fracaso del modelo económico neoliberal, implantado hace más de 30 años, ha sido evidente: el país no creció, unos cuantos acumularon inmensas fortunas y la mayoría de la población subsiste en la pobreza. La apertura comercial indiscriminada y el sometimiento a las políticas de los organismos financieros internacionales no se tradujeron en un desarrollo económico sostenible e incluyente.

La realidad es que México es de los países que menos crece, que menos empleo genera, así es una de las naciones con mayor migración y desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se requiere reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.



Los gobiernos neoliberales dismantelaron la planta productiva nacional, las instituciones y las políticas sociales y económicas del Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las privatizaciones de empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el exterior y entregaron el control de la economías a unas cuantas empresas y monopolios. Políticos y corporativos se apoderaron del poder público para perpetuar sus privilegios.

Las llamadas reformas “estructurales” que impulsa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto del mundo –en México justificaron el pillaje, en particular con las privatizaciones y los rescates como el Fobaproa, y ahora la reforma energética. A pesar del prologando fracaso el modelo, el PRI, el PAN y la oligarquía, insisten en continuar la misma política económica y aprobar la reducción de prestaciones y salarios, la sustitución de impuestos directos por indirectos (como el IVA), haciendo más injusto el sistema fiscal al restarle progresividad) y privatizar la industria eléctrica y petrolera.

Los monopolios y los precios abusivos son anticonstitucionales

La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas nacionales y privilegió a unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Se formaron monopolios en las principales ramas de la economía que imponen su ley. En este país empobrecido, la población paga más por bienes y servicios que en las naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de calidad.

Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable; 176 por ciento más por crédito a la vivienda.



El Estado debe cumplir con la Constitución y asumir su obligación de velar por la prosperidad de la población y no sólo por los negocios de un puñado de empresarios. **Morena** está comprometido con un Estado de bienestar y el combate a la desigualdad, con el apoyo a las empresas y productores nacionales, el impulso a las cadenas productivas regionales y la creación de empleo.

Queremos un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos económicos de subsistencia, solidaridad comunitaria, ayuda mutua, asociación; además del mercado justo y la economía local.

Por ello, es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante, por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar y la felicidad, imparta nueva viabilidad a la Nación, preserve y restaure los recursos naturales y mejore el medio ambiente. Nuestro proyecto busca impulsar el desarrollo a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia, pero ejerciendo la responsabilidad del Estado en las actividades estratégicas reservadas por la Constitución, en la planeación del desarrollo y como garante de los derechos sociales y ambientales de las actuales y de las futuras generaciones.

En este nuevo modelo económico por el que luchamos, el nivel de vida de la gente debe ser el indicador principal de una economía productiva, no especulativa, para que haya industrias, consumo, mercado, crecimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente.

Un modelo en donde el Estado asuma la responsabilidad de conducir el desarrollo sin injerencia externa. Impulsando cadenas productivas con los sectores privado y social, maximizando el empleo y el valor agregado, impulsando el apoyo a la educación, la ciencia y la tecnología.

Un modelo que fortalezca el mercado interno, salarios justos y remunerativos para los trabajadores, que reconozca el derecho al trabajo. Un modelo económico que promueva la libertad y la democracia sindical. En donde el Estado no intervenga en los asuntos internos de las organizaciones gremiales.



Un modelo que en la globalidad, promueva una economía nacional fuerte, con mayor competencia interna y competitividad frente al exterior, donde el Estado promueva la economía nacional y las relaciones comerciales con el exterior sean equilibradas y recíprocas. Un modelo que fortalezca la economía popular y a la pequeña y mediana empresa; con financiamiento accesible y barato para las actividades productivas.

Un nuevo modelo que promueva el respeto al artículo 28 Constitucional, que implica acabar con los monopolios y los precios abusivos que dañan la economía de sectores populares, clases medias, productores, empresarios y comerciantes, golpean el poder adquisitivo y de ahorro de la gente y frenan la inversión y el empleo.

Un nuevo modelo económico que acabe con los privilegios fiscales. La injusticia fiscal profundiza la desigualdad social. Las grandes empresas gozan de privilegios fiscales y casi no pagan impuestos mientras la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Estamos en contra de gravar con IVA las medicinas y los alimentos y a favor de una reforma fiscal progresiva. Que las grandes corporaciones y los más ricos del país, paguen impuestos a cabalidad.

Un nuevo modelo económico que reanime al campo y a la agricultura y recupere la soberanía alimentaria. **Morena** lucha porque se fortalezca la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios, estableciendo una reserva estratégica alimentaria, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros. **Morena** lucha por una economía solidaria.

Los movimientos de capitales y operaciones financieras especulativas no deben estar exentas de impuesto. Se deben gravar con tasas vigentes de impuestos sobre la renta para evitar ineficiencias en la asignación de recursos



o sobrevaluación artificial de la moneda que sólo dañan la planta productiva y el empleo.

Que el Banco de México tenga un nuevo mandato donde además de la inflación, considere indicadores como el empleo de la planta productiva, el crecimiento y el nivel de vida de la población.

Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera, la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura, pesca, ganadería y producción forestal. Por eso todos los proyectos económicos y de desarrollo deben tomar en cuenta el respeto al medio ambiente y la salud de la población.

Consumo responsable

Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la información técnica para normar la adquisición de productos naturales sanos y artículos que no dañen la naturaleza. Reducir el consumo de productos contaminantes. Poner en práctica la reutilización y el reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas sociales y de integración para procurar un nuevo orden social.

5 propuestas en materia laboral y sindical

La política laboral y salarial que se ha seguido en México en los últimos 30 años, aseguró el crecimiento de las ganancias del capital nacional y extranjero, a costa de mantener una contención salarial y el control sindical.

El salario real ha perdido 70 por ciento de su valor adquisitivo. Los aumentos salariales se han fijado en función de la inflación y no del incremento real de precios de artículos y servicios. Los precios suben más que los salarios; hoy la mayoría de los trabajadores no puede consumir la canasta básica.



El empleo no crece y el existente se deteriora. Enfrentamos la precarización de las condiciones laborales, la eliminación de la estabilidad en el trabajo (ahora hay contratos por honorarios o temporales. La subcontratación laboral precariza aun más a los trabajadores que ya no tienen una relación laboral con su patrón. Más de la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no gozan de seguridad social, pensión o jubilación, prestaciones de ley como vacaciones, aguinaldo o reparto de utilidades. No crece el empleo, crece más la población cada año.

Todo esto ha sido posible gracias al modelo de control sobre los trabajadores. No hay libertad de asociación en el país. 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección, es decir, son firmados por patrones y sindicatos sin tomar en cuenta a los trabajadores. A los intentos de democratización sindical, patrones y autoridades responden con despidos y represión.

La justicia laboral es lenta y deficiente. No hay transparencia ni rendición de cuentas.

Por lo anterior, **Morena** presenta sus propuestas laborales y salariales:

1. Debe darse una lucha frontal contra el contratismo de protección, asumiendo la inclusión e la LFT del artículo 388 Bis, planteado por distintos sindicatos y diputados, lo que permitirá que los trabajadores decidan cual sindicato los represente. Ampliar y fortalecer la inspección laboral y las procuradurías de defensa del trabajo, para hacer respetar las normas laborales con programas piloto en las ramas de máxima violación de derechos, como la construcción, la confección, el comercio y los servicios.
2. Transparencia en relación a todos los documentos que obran en las oficinas publicas de origen gremial o patronal, incluyendo la información sobre los recursos públicos que reciben los sindicatos y su destino.



3. Crear centros de estudio del trabajo en colaboración con instituciones educativas y especializadas, para proponer reformas que den vigencia al trabajo digno, a la igualdad de género y que den respuesta a los retos de los nuevos procesos de trabajo y al uso racional de los recursos humanos, en un entorno de protección universal de los derechos laborales.
4. Establecer el seguro de desempleo con participación mixta, que de protección a la pérdida del empleo y favorezca la capacitación para la reinserción laboral.
5. Plan permanente de empleo y capacitación a los jóvenes, con el fin de asegurar, según sus capacidades, habilidades y conocimientos, su incorporación al mercado de trabajo, con todos los derechos contenidos en las leyes y normas vigentes.

8. Ampliar los derechos sociales y lucha contra la desigualdad.

El modelo neoliberal no disminuye sino que profundiza la desigualdad social. Por un lado, la economía se subordinó a un modelo dependiente. Se limitó la rectoría económica del Estado, se desmontó la planta productiva nacional en el campo y en la ciudad (hoy dependemos del exterior) y se apostó a los sectores exportadores, manufactureros y agroindustriales. La economía prácticamente no ha crecido, pero sí la pobreza en la que viven por lo menos 60 millones de mexicanos.

Los gobiernos neoliberales adelgazaron al Estado y sus responsabilidades, redujeron el gasto social y desmantelaron instituciones sociales y culturales, ocasionando el deterioro de la seguridad social, salud, educación, cultura y sobre todo el deterioro de nuestra calidad de vida.

Hoy millones de mexicanos tienen como único horizonte el hambre, la pobreza, la desigualdad, la iniquidad, la violencia, la intolerancia y la opresión.



La política social del gobierno actual es la continuidad neoliberal. En el combate a la pobreza se mantiene la misma estrategia de focalización que desde hace 19 años no ha mostrado resultados ni avances significativos. La pobreza crece y se extiende el deterioro del tejido social.

En materia laboral, educativa y de salud, se enfrentan serios retrocesos y pérdida de derechos.

La Seguridad Social sufre los efectos de la reforma que impuso un modelo que privilegia las ganancias de las administradoras de los ahorros en detrimento de los trabajadores.

En Salud, los agentes privados sustituyen cada vez más a los públicos y se avanza en una reforma para crear un Sistema Único con un contenido altamente privatizador.

El país dilapida la riqueza que tiene en sus jóvenes, les cierra las oportunidades de estudio y de trabajo.

Las personas con discapacidad solo están presentes en acciones asistencialistas, ni se les reconoce sus derechos ni se les otorga apoyo para enfrentar las condiciones de desigualdad que padecen.

Se requiere modificar el paradigma de la política, para que el Estado sea un garante activo del cumplimiento de los derechos sociales a través de la acción pública, de políticas públicas, de legislaciones específicas; de políticas fiscales progresivas.

Derecho a la educación, clave en la transformación del Estado

La educación es prioritaria como palanca para el desarrollo social y económico y es factor fundamental para la cohesión y la movilidad social. De igual modo, es la vía principal para formar una ciudadanía crítica, solidaria y participativa.



Existe un rezago educativo acumulado en el país, la marginación de millones de niños y jóvenes en todos los niveles del sistema educativo nacional, el analfabetismo, las precarias condiciones en que labora la mayoría de maestros en el país, son algunas calamidades de la realidad educativa.

Un problema central es el del presupuesto. Los legisladores de **Morena** se comprometen a pugnar porque se incremente el presupuesto destinado a la educación y a se distribuya de tal manera que contribuya al abatimiento del rezago educativo que supera los 38 millones de personas.

La formación de la población es fundamental. Hay que impulsar medidas para que el promedio nacional de escolaridad sea el bachillerato, en congruencia, deben ser obligatorias la educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Resulta vergonzoso que haya más de 6 millones de analfabetas en el país y no hay una campaña para cambiarlo en un lapso breve.

Aunque el nivel de preescolar se estableció como obligatorio a partir del ciclo escolar 2004-2005, los jardines de niños públicos absorben menos de 60 por ciento de la demanda. Por lo tanto, para dar acceso a 3 millones de niños en este nivel deben construirse las aulas y crearse las plazas necesarias.

En la educación primaria se encuentran prácticamente en el abandono planteles y los maestros públicos que, además de tener un salario bajísimo, sufren una campaña de estigmatización violatoria de sus derechos humanos, resultado de la llamada reforma educativa. Se debe invertir más en el nivel primaria y garantizar seguridad laboral a los docentes.

Para que esto suceda, resulta prioritario derogar la última reforma educativa que ha lesionado los derechos de los maestros y creado las condiciones para la privatización del sector. Lo que ha generado un movimiento prolongado de los maestros en defensa de la educación pública y sus derechos.



Morena pugnará porque se aumente el presupuesto público para garantizar los siguientes mínimos:

- Una infraestructura suficiente, adecuada y digna;
- Becas escolares, útiles, libros de texto, uniformes y almuerzos a todos los inscritos en el nivel escolar básico;
- Becas escolares a estudiantes de bachillerato y nivel superior del sistema público;
- Un programa especial de fortalecimiento y ampliación de los recursos educativos en las zonas de mayor rezago y pobreza del país. En el caso de las zonas indígenas, apoyo con albergues y transporte a estudiantes de comunidades aisladas. Es indispensable involucrar a los pueblos indígenas en el diseño de una educación que respete su identidad cultural y su lengua.
- Atender la formación integral de los maestros y procurar mejorar sus ingresos y condiciones de trabajo. La evaluación debe servir para mejorar las políticas y los programas de formación, no para nulificar los derechos laborales.

Salud para todos

Las condiciones de salud de la población están empeorando en México. Por primera vez en medio siglo la esperanza de vida bajó entre 2005 y 2010. Las causas son la diabetes, las enfermedades del corazón y los homicidios. La violencia es ya el principal problema de salud pública entre hombres jóvenes. La alta frecuencia de sobrepeso y obesidad y la falta de ejercicio explican el incremento de las muertes por causas diabéticas y cardiovasculares. No se ha reducido la mortalidad materna y se está lejos de alcanzar la Meta del Milenio.

De acuerdo con la propaganda gubernamental, en 2012 se alcanzó la cobertura "universal" de salud, gracias a la expansión del Seguro Popular. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) encontró que al menos **25 por ciento de la población carece de cualquier seguro**. Además, muchos asegurados no tienen acceso a los servicios requeridos o tienen que pagar por ellos.

La gente no puede acceder a los servicios de salud por varias razones: a) las restricciones del Paquete de Servicios del Seguro Popular; b) la escasez de



unidades de salud; c) la mala calidad de los servicios (revelada por la ENSANUT), explicable por la falta de personal, insumos y medicamentos; y d) la insuficiencia del presupuesto público de salud. México invierte tres por ciento del PIB en salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda contra el 6 por ciento para alcanzar el acceso universal a los servicios.

Las propuestas para la salud

1. En **Morena** promovemos como **principios en las políticas de salud**: el valor igual de todos los seres humanos; el acceso universal, igual, oportuno y gratuito a los servicios requeridos ante la misma necesidad de salud; solidaridad entre enfermos y sanos, entre generaciones y en el financiamiento; centralidad de las instituciones públicas.
2. Proponer un **modelo de atención integral y escalonado** con énfasis en la educación para la salud, la promoción y la prevención. Con acceso a servicios complejos requeridos y a la rehabilitación integral, físico-psíquico-social. Debe legislarse para dirigir un esfuerzo especial a reducir la violencia y atender profesionalmente a las víctimas.
3. Nuestra propuesta es que se presten **servicios médicos con medicamentos gratuitos**, incluso para la población sin seguridad social. Hoy casi nadie paga por el Seguro Popular por lo que la gratuidad no significaría un mayor gasto y permitiría acabar con la discriminación en los servicios.
4. La garantía del **acceso a los servicios requeridos** sólo será una realidad si se define un programa de construcción de servicios públicos de salud y contar el suficiente personal médico en contacto directo con el paciente y continuamente actualizado. Además deben garantizarse medicamentos, insumos y equipo, previa "evaluación tecnológica" sistemática para el uso racional de recursos públicos.
5. Se propondrá construir un **sistema de traslado** seguro y eficaz de pacientes, particularmente de las mujeres embarazadas para abatir la alta mortalidad materna.
6. Se deben cambiar las relaciones entre ciudadanos y los servicios de salud. Legislar sobre el **control social y la participación popular** en salud,



garantizando información y educación, así como las estructuras institucionales para su ejercicio.

Propuestas en materia social:

El Estado y no el mercado es el responsable de garantizar el acceso a bienes y servicios sociales fundamentales para el desarrollo de las personas y de la sociedad.

Morena lucha por hacer realidad los derechos sociales establecidos en la Constitución y por ampliar su alcance. Por educación gratuita, laica y de calidad en todos los niveles, por servicios de salud universales, gratuitos y de calidad, vivienda digna y adecuada en tamaño, materiales y ubicación; por servicios básicos y accesibles de agua potable, drenaje y energía eléctrica, por el derecho a la alimentación saludable y suficiente.

Las propuestas legislativas y de políticas públicas que **Morena** se compromete a impulsar en materia social, son:

- Que el bienestar de la población sea el eje principal de la política social. Las libertades y derechos no pueden ejercerse plenamente si los mexicanos no tenemos resueltas necesidades elementales como el trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad y tranquilidad social.

- El primer paso es hacer cumplir los principios constitucionales referidos a los derechos sociales. Que el Estado asuma su responsabilidad social para garantizar que cada hombre y cada mujer reciban, desde su nacimiento, una alimentación básica saludable y suficiente; tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones sociales; dispongan de una vivienda digna y servicios públicos básicos de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las decisiones colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los programas económicos, sociales y culturales que se establezcan en su beneficio; cuenten con bases materiales, recursos e instrumentos para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad;

con reconocimiento y respeto de sus preferencias, identidad cultural, género y decisiones sobre su vida y su cuerpo; que su patrimonio familiar y su seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los 65 años.

- Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales. Las inversiones públicas para garantizar los derechos sociales son una obligación que el gobierno debe cumplir. Debe terminarse con el sistema de focalización de los programas sociales, es discriminatorio y se condiciona su ingreso y permanencia. Se deben establecer mecanismos que garanticen efectivamente la defensa, exigibilidad y cumplimiento de cada derecho.

- Hay que hacer efectivo el derecho constitucional de todos a la alimentación.

- Garantizar el acceso al derecho a la salud a todas y a todos las mexicanas y mexicanos, mediante el fortalecimiento del sistema público de salud.

- Garantizar el acceso a medicamentos gratuitos.

- Revisar los sistemas de pensiones para garantizar retiros dignos a las trabajadoras y trabajadores.

- Eliminar los sistemas pensionarios de privilegios en los altos mandos de los estatales.

- Ampliar la oferta educativa a nivel medio y superior para garantizar el acceso a todos los jóvenes que quieran estudiar;

- Impulsar un sistema de apoyo a la permanencia escolar como el salario estudiantil.

- Garantizar el completo acceso a la salud a todas las personas con discapacidad e implementar un programa de apoyo económico las personas con discapacidad que carezcan de seguridad social.



- Impulsar una Ley que reconozca a las trabajadoras domésticas y les garantice sus derechos.

- Acabar con el uso clientelar del presupuesto estatal para reorientarlo a las grandes prioridades locales.

- La promoción, prevención y atención a la salud deben ser consideradas las bases en que pueda erigirse el bienestar físico, espiritual y emocional de nuestra población.

- Se defenderá el derecho de los jóvenes a la educación y al trabajo.

- **Morena** lucha por los derechos de los niños y las niñas.

El acceso de todos a la cultura, la lectura, la música, el cine y el arte, es una prioridad de **Morena**. Así como el todos puedan contar con las bases materiales, de recursos e instrumentos que requieran para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad.

Morena lucha por establecer un Estado solidario que atienda y respete los derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños.

La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso insistimos que por el bien de todos, primero los pobres.

9. Por el respeto a los Derechos humanos y contra la violencia.

México vive un grave retroceso en materia de derechos humanos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, pone en evidencia la crisis del Estado mexicano.



Con la "guerra contra el narcotráfico" iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, la violencia se disparó en todo el país. Hoy se reconoce la existencia de 27 mil desaparecidos y más de 80 mil personas asesinadas. Sólo en los dos años de la actual administración se han registrado 24 mil ejecuciones.

Las fuerzas de seguridad de México han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos. El atropello sistemático de las garantías se debe a la corrupción y a la impunidad con que actúan los cuerpos de seguridad y autoridades, sobre todo aquellas encargadas de impartir justicia.

En nuestro país se conculcan los derechos humanos en casi todos los ámbitos: en México la tortura se aplica sistemáticamente a los detenidos para obtener confesiones bajo coacción; la libertad de expresión no se respeta, se criminaliza la protesta social; decenas de periodistas han sufrido persecución y agresiones, otros han sido asesinados o se encuentran desaparecidos; la misma suerte han corrido activistas y defensores de derechos humanos; los migrantes sufren constantes abusos por parte de las autoridades migratorias en colusión con la delincuencia organizada; las cárceles y centros de detención no ofrecen seguridad a los detenidos, y en muchas prisiones los presos viven en condiciones infrahumanas.

Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente asegurados, junto con los derechos colectivos económicos, sociales y culturales. Las libertades civiles y políticas sólo pueden ejercerse a plenitud si se cumplen el derecho al bienestar, a la educación, a la seguridad social, a la propia identidad y a las condiciones de vida que hacen la felicidad de los hombres en sociedad. Los derechos humanos están reconocidos por la Constitución, pero hay que hacerlos cumplir.

En este contexto, Morena propone:

- Llevar a cabo un censo para poder determinar los casos de desaparición forzada en San Luis Potosí.
- Elaborar un registro actualizado de los luchadores sociales que se encuentran



presos en las diferentes cárceles del estado.

- Proponer una ley de amnistía para todos ellos.
- Pugnar por que el Ejército y la Marina, no intervengan en acciones policiales contra la población civil.
- Implementar reformas legales para que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario.
- Documentar los casos de vulneración sistemática de los derechos humanos en prisiones o centros de detención.
- Garantizar que las detenciones se realicen con estricto apego a la ley.
- Proponer una investigación imparcial y enjuiciamiento por autoridades civiles, de miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos.
- Fortalecer los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas y garantizar el libre ejercicio de su profesión.
- Castigar la tortura como delito grave y juzgar a los servidores públicos que cometieron o permitieron actos de tortura, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.
- Erradicar la violencia de género y definir campañas y acciones efectivas.
- Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil encargadas de vigilar el respeto a los derechos humanos.
- **Morena** lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y buscará que se investiguen las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia.
- Establecer mecanismos para garantizar la igualdad en la diversidad y hacer valer los derechos de todos frente a la discriminación social, laboral y política. Visibilizar la violencia homofóbica, de género y étnica y promover acciones eficaces para castigar la discriminación y los crímenes de odio.

Seguridad y Justicia

El pueblo de México quiere justicia y seguridad, espera que la autoridad cumpla con lo que mandata la Constitución.



Combatir las causas. En materia de delincuencia es más importante prevenir que reprimir; es básico atajar las causas que producen los delitos, y no solo perseguir a los delincuentes cuando ya cometieron un ilícito; el crimen es el resultado de un ambiente propicio, hay un caldo de cultivo en el que se genera la ilegalidad y el desorden, el delito no surge por generación espontánea, es el resultado de factores identificables.

La espiral de violencia genera más violencia, odio y frustración. La paz es una necesidad para el desarrollo y la regeneración del país y esta sólo puede darla la tranquilidad social y la atención a las causas sociales, económicas y culturales de la violencia.

La solución de fondo es abatir las causas profundas de la desesperación y el rencor que orillan a las personas, en especial a los jóvenes, a cometer actos en contra de la sociedad, que exige cumplir con la ley pero que nada les ofrece. Es indispensable una respuesta real y oportuna a la pobreza, a la marginación y a la falta de oportunidades.

Nuestra propuesta es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas sociales. El desarrollo regional y los incentivos económicos son mejor respuesta que más policías y militares.

Por ello, la primera trinchera contra el crimen, no está en las armas, ni en leyes cada vez más severas, ni en más reclusorios. Se encuentra en las escuelas, las fuentes de trabajo, el deporte, el arte y la cultura; mejorar el ambiente es más eficaz y menos costoso social y económicamente.

Con esta visión, proponemos las siguientes líneas generales para la acción legislativa:

1.- Presentar a los detenidos, sean o no culpables, ante los medios de comunicación, equivale a la pena de infamia, expresamente prohibida por el artículo 22 constitucional. Los sospechosos, presuntos responsables, detenidos o presentados, no serán en ningún caso motivo de exhibición ante los medios



de comunicación; la única excepción será si su imagen se requiere para que otras víctimas puedan identificarlos.

2.- Los detenidos con cualquier carácter, no deben ser considerados como “el enemigo”, son personas sujetas a un proceso legal y si llegan a ser sentenciadas, tendrán que cumplir la pena que les corresponde. Entre tanto, se respetará la presunción de inocencia y en ningún caso estarán sujetas a tortura, vejaciones o algún otro ataque a sus derechos humanos.

3.- Especial atención se pondrá en los delitos denominados de cuello blanco, en los que la posición económica o social de los autores, les ha proporcionado impunidad; cuidaremos de proteger los bienes y recursos del Estado que son patrimonio de todos. Con el mismo cuidado, buscaremos que se investigue y consigne a quienes cometan fraudes masivos, se adueñen de cajas de ahorros, recursos o bienes de comunidades campesinas, de sindicatos, cooperativas o grupos de trabajadores.

4.- Propondremos normas que garanticen una representación eficaz a víctimas y ofendidos, con profesionalismo y respeto, evitando cualquier tipo de molestias, pérdida de tiempo y riesgos que puedan correr. La representación social encarnada en el Ministerio Público, más allá del apoyo asistencial, procurará que la víctima se reintegre a la vida normal de su comunidad.

5.- El personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración y Administración de Justicia, contará con la posibilidad de demostrar que tiene la capacidad, la honradez y el valor para desempeñar el servicio público. Se cuidará que no se cometan abusos a derechos humanos o laborales, aprovechando las pruebas de confianza que exige la ley.

6.- En la legislación que defenderemos, rescataremos dos principios básicos que la ciudadanía espera de un poder legislativo verdaderamente representativo: No permitir que se fabriquen culpables ni se siembren armas, drogas o pruebas falsas. El otro principio es el monopolio del Ministerio público



para dirigir la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes (artículo 21 Constitucional), aunque se otorga a la policía una función similar.

7.- La legislación irá encaminada a asegurar que el Ministerio Público sea un órgano técnico, integrado por profesionales del derecho, que tienen el encargo de investigar los delitos, para lo que deben contar con autoridad, mando de fuerza, facultades de presentar, detener e interrogar a personas y buscar pruebas e indicios de los delitos. En un segundo momento, ser parte en el proceso penal, la parte acusadora, sin ventajas frente a la defensa y en equilibrio con ésta, frente a la imparcialidad y autoridad del Juez.

10. Por el rescate del campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales.

El campo carece de rumbo, no es prioritario para el gobierno.

La continuidad neoliberal, la inercia administrativa y la inacción pública han caracterizado al gobierno de Peña Nieto en sus políticas hacia el campo. El rumbo del agro mexicano lo fija el interés de los grandes consorcios agroalimentarios transnacionales y la agenda de Estados Unidos.

La reforma energética y a la ley minera han colocado al campo como objeto de despojo a favor de las empresas de energía y de las mineras en lo que se ha denominado la Ley "Peña" de desamortización de tierras campesinas e indígenas.

Presupuesto del campo para la desigualdad, la dependencia y el clientelismo.

No obstante esta política, el gobierno actual ha dispuesto de un presupuesto creciente para el campo. Pero crecen la desigualdad, la dependencia, la pobreza y la migración en medio rural. Así, por ejemplo, la Sagarpa pasó de tener un presupuesto anual de 75 mil millones en 2013 a 92 mil millones en 2015 (incremento de 22.65 por ciento en tres años). Sin embargo, 70 por ciento de esos recursos han terminado en el 15 por ciento de las unidades de producción rural conformada por agricultores ricos de los estados del norte y



por las corporaciones agroalimentarias. El restante 85 por ciento de los pequeños y medianos productores únicamente recibe 30 por ciento de los de los subsidios para el campo. Ha caído la inversión pública productiva en el campo, principalmente en el sur-sureste del país. Para los pequeños y medianos productores y para la mayoría de la población rural, únicamente existen apoyos asistencialistas, con una orientación clientelar para la compra de votos.

Crisis general de los precios agrícolas y desorden en los mercados. Como consecuencia de la apertura total e indiscriminada a las importaciones, la monopolización del mercado interno y la creciente vulnerabilidad de nuestro país frente a la volatilidad de los mercados agrícolas internacionales, aunado a la falta de responsabilidad y previsión gubernamental, en dos años de gobierno de Peña Nieto, hay una drástica caída de los precios del productor de entre 40-70 por ciento en la mayoría de los cultivos: café, caña de azúcar, cítricos, maíz, frijol, sorgo, trigo y arroz, entre otros. Aunado a lo anterior, en el mismo nivel se han incrementado los costos de producción, provocando una crisis general de rentabilidad entre los productores del campo. Esto ha motivado continuas movilizaciones de productores en demanda de precios remunerativos y de la intervención del gobierno para la comercializar las cosechas. La respuesta gubernamental ha sido tardía, insuficiente e inercial; todo en el marco de “las leyes universales del mercado”.

Lo que el país requiere para combatir la desigualdad y la pobreza y erradicar la malnutrición es otra política económica, agrícola y alimentaria con base en derechos y una política de Estado social, democrática, sustentable y nacionalista de largo plazo.

Despojo de recursos en ejidos y comunidades.

Con el retorno del PRI al poder, se han radicalizado los procesos de despojo y apropiación de recursos naturales en los territorios de los ejidos y comunidades. La contrarreforma energética se establece una verdadera y peligrosa política de Estado para el despojo y la depredación de las tierras en manos de campesinos e indígenas. En este sentido, es clara la continuidad



entre el actual gobierno y los gobiernos panistas en materia de megaproyectos mineros, hidráulicos, comerciales e inmobiliarios en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores rurales y en la lógica de continuar impulsando un modelo extractivista de nuestros recursos naturales en beneficio de un pequeño grupo de grandes corporaciones multinacionales.

Por si esto fuera poco, con la actual administración se ha profundizado la criminalización de las luchas sociales contra los megaproyectos depredadores, permitiendo la vinculación perversa entre las empresas y el crimen organizado, elevando la persecución y asesinato de dirigentes sociales.

Resistencias campesinas e indígenas en ascenso.

En el medio rural de San Luis Potosí la resistencia, la organización, la construcción de alternativas (organizativas, económicas, productivas, etcétera) y las movilizaciones contra la continuidad neoliberal y sus proyectos de muerte y contra la anunciada "gran reforma rural" continúan en franco ascenso.

Morena reconoce las labores del campo como actividades *estratégicas*; valora el potencial productivo de la agricultura en pequeña y mediana escala, con un modelo de agricultura rentable y sustentable, sin transgénicos y sin monopolios; promueve el derecho a una vida buena y el pleno respeto a la propiedad social de la tierra y a los derechos humanos y ciudadanos.

El cuidado de la naturaleza es una tarea de todos

Enfrentar la catástrofe ambiental mundial, fruto de una modernización neoliberal, implica una ineludible participación personal, familiar y comunitaria de todos los pueblos. Requiere cambiar hábitos, prácticas y costumbres. La defensa del medio ambiente debe ser incorporada a nuestra agenda de deberes ciudadanos. Mantener la biodiversidad, la salud, la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles que permitan sustentar la vida y el bienestar de los seres humanos, la vida animal y vegetal es un principio de una responsabilidad ambiental. No hay futuro sin proteger la naturaleza, porque queremos un futuro para todos, proponemos un desarrollo sustentable y democrático.



Buscamos al construcción de un estado fraterno y solidario que atienda a todos, pero en primer lugar a la población que vive en la pobreza. La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.

